

Estrategia geopolítica bolivariana

Costos y consecuencias

Por Diseño Estratégico y Análisis Prospectivo.

La violación a la soberanía ecuatoriana por parte del ejército colombiano es un hecho grave y condenable. El aspecto más relevante se relaciona con el modo en que el gobierno colombiano asestó un duro golpe a la estrategia geopolítica del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Al evidenciar los nexos entre la revolución bolivariana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se vuelven a poner de manifiesto las actividades de este grupo y los objetivos del proyecto geopolítico bolivariano en México.

El primero de marzo el ejército colombiano incursionó en territorio de Ecuador para llevar a cabo un operativo militar contra una célula de las FARC que actuaba desde su refugio ecuatoriano a sólo dos kilómetros de la frontera. El ataque asestó un duro golpe a esta organización al eliminar a su segundo dirigente más importante, Raúl Reyes, y a su compañera, hija del líder máximo, Pedro Antonio Marín, alias “Tirofijo”.

La acción militar en suelo ecuatoriano implicó una clara violación a la soberanía del país andino y al derecho internacional. Resultó, por tanto, obvia la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) que, de modo unánime, definió el hecho como un atentado contra la soberanía de Ecuador.

Sin embargo, cabe resaltar que dicha resolución no condenó abiertamente a Colombia, motivo por el cual el presidente ecuatoriano no quedó plenamente satisfecho. También vale la pena subrayar que, pese a su gravedad, el conflicto no escaló y se conjuró el riesgo de una confrontación militar.

Colombia actuó con prudencia al no movilizar tropas hacia las fronteras venezolana y ecuatoriana. Pero el factor clave

fue cómo la reunión de la OEA en un primer momento y la Cumbre de Río después contribuyeron a la distensión. Sin lugar a dudas, la postura de Brasil y de Cuba fue decisiva. En particular, este último país, ocupado en su propio proceso de consolidación de Raúl Castro al frente del gobierno, no parece interesado en la desestabilización de la región.

Así las cosas, la pregunta obligada se refiere a por qué en un caso tan claro de violación a la soberanía de un estado la condena a Colombia no fue ni inequívoca ni contundente. De entrada, se puede manejar la hipótesis de que, para varios gobiernos latinoamericanos, los argumentos colombianos en relación con el apoyo, que tanto Ecuador como Venezuela brindan a las FARC han encontrado una buena recepción.

Cuando el gobierno de Uribe negociaba con Estados Unidos el programa de apoyo a su lucha contra la narcoguerrilla conocido como Plan Colombia, advirtió a sus vecinos (Venezuela, Ecuador, Brasil y Panamá) del llamado “efecto cucaracha”, consistente en la búsqueda de refugio más allá de las fronteras de Colombia.

De hecho, el éxito de la acción militar contra las FARC depende, al menos en parte, de la cooperación de los estados vecinos en el sentido de no permitir el establecimiento de refugios en su territorio. El problema es que hay evidencias de tolerancia y aun apoyo de los gobiernos venezolano y ecuatoriano a dicho grupo.

Otra pregunta importante se relaciona con la racionalidad política del ataque colombiano o, planteado de otra forma, cuáles son los beneficios que justifican el costo político y diplomático de haber violado la soberanía de un país vecino. Tal vez la respuesta se halle en el golpe asestado a la estrategia geopolítica del presidente Chávez. El asalto al cuartel de las FARC permitió rescatar información relativa a las operaciones criminales de la organización, así como a los nexos entre ésta y la revolución bolivariana; en particular, se ha divulgado una supuesta aportación del gobierno venezolano de 300 millones de dólares para apoyar las actividades de las FARC.

Con importantes costos humanos se ponen en evidencia los objetivos políticos subyacentes en el activismo mediador de Hugo Chávez para la liberación de los rehenes. Como se sabe, esta mediación ya había dado lugar a serios conflictos entre ambos gobiernos, sobre todo cuando el mandatario venezolano fue más allá de su papel como mediador y, por iniciativa propia, estableció contacto con el ministro de defensa de Colombia para negociar la desmilitarización reclamada por las FARC.

Cada vez resulta más clara la existencia de una alianza entre el chavismo y la narcoguerrilla. A cambio del reconocimiento internacional por haber posibilitado la liberación de los rehenes, Chávez empujaría la idea de considerar a las FARC como grupo no terrorista de luchadores sociales que debería ser reconocido como fuerza beligerante, objetivo clave para la estrategia geopolítica de Chávez: contar con un aliado legitimado y armado en territorio colombiano. En el plano interno, la acción militar del gobierno de Uribe fue objeto de un gran apoyo: las encuestas levantadas la semana posterior al ataque indican niveles de aprobación superiores al 70%.

Creadas en 1964, las FARC son una organización de corte criminal que, en los hechos, no se ha distinguido por llevar a cabo actividades nítidamente revolucionarias. Se le considera un grupo terrorista en tanto, de acuerdo con la Cruz Roja Internacional, es la mayor sembradora de minas antipersonales en el mundo. Su verdadero objetivo ha sido apropiarse de una base de operación territorial desde la cual actúa como una banda dedicada al secuestro (por razones económicas y para la negociación y el intercambio con el gobierno colombiano) y que, incluso hostilizando a la población, ha establecido una alianza con el crimen organizado, particularmente el narcotráfico y el contrabando de armas, cuyas ramificaciones rebasan las fronteras de Colombia y llegan, incluso, a México.

Las implicaciones para México son obvias. Desde tiempo atrás se ha insistido en la activa presencia de células de apoyo a la revolución bolivariana y a las FARC en nuestro país. Ciertamente, ya fue clausurada la oficina que abiertamente tenía este grupo en México. Pero las actividades continúan

y son particularmente cuestionables desde el punto de vista de la seguridad nacional.

No sólo se trata de adoctrinamiento y de lazos solidarios entre organizaciones ideológicamente afines. Implican también, por un lado, nexos con los cárteles mexicanos de la droga y participación en el trasiego de armas. Por otro lado, resulta clara la relación política de las FARC y las células bolivarianas con diversos grupos radicales como el EPR, las cuales incluyen el adiestramiento de jóvenes mexicanos en tácticas guerrilleras y aun terroristas.

El éxito de la acción militar contra las FARC depende de la cooperación de los estados vecinos para no permitir el establecimiento de refugios en su territorio. El problema es que hay evidencias de tolerancia.

No se puede pasar por alto la similitud técnica entre las explosiones de los ductos de Pemex y los actos de sabotaje que suelen practicar las FARC; tampoco se puede ignorar la presencia de activistas mexicanos en un supuesto Congreso Bolivariano en Quito y su presencia posterior en el campamento atacado por el ejército colombiano ni la estrecha relación de Lucía Morett con las FARC y con el EPR (Ejército Popular Revolucionario). Dicho en otras palabras, el escenario de la narcoguerrilla no es del todo descartable.

Frente al conflicto entre Ecuador y Colombia, la respuesta inicial del gobierno mexicano ha sido diplomática, políticamente correcta y no comprometedor, pero la pregunta es si se está haciendo algo

respecto a las amenazas que los vínculos entre el chavismo, las FARC, el crimen organizado y la guerrilla plantean a la seguridad nacional. Sería irresponsable no actuar, sobre todo cuando se sabe que entre los objetivos expresos del plan de gobierno del presidente Chávez se encuentra el apoyo a los grupos de opositores a los gobiernos de México y Centroamérica.

Finalmente, la pregunta más importante se refiere a cómo combatir a las FARC. Los gobiernos anteriores han fracasado, ya sea que hayan intentado la confrontación militar o la negociación. Al no existir de parte de este grupo objetivos políticos y reivindicaciones sociales precisas, la negociación ha conducido al callejón sin salida del chantaje: tomas rehenes como moneda de cambio. La vía militar, por su parte, conlleva altos costos, pero sobre todo demanda la cooperación y la acción coordinada con las naciones vecinas, premisa de remota satisfacción en el contexto actual. ❁